Constancia: A despacho del señor Juez el expediente de la acción de tutela de la referencia, con el informe que se encuentra pendiente de emitir el respectivo fallo. Sírvase proveer.

Mayo 18 de 2021

**JUAN FELIPE GIRALDO JIMÉNEZ
SECRETARIO**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE MANIZALES

Manizales, dieciocho (18) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

PROCESO	ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE	JOHN JAIRO MUÑOZ ZULUAGA
APODERADO	LUIS CARLOS JARAMILLO CANDAMIL
ACCIONADO	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG-
	GOBERNACIÓN DE CALDAS
	FIDUCIARIA LA PREVISORA -FIDUPREVISORA-
VINCULADA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CALDAS
RADICADO	17001-31-03-006-2021-00111-00
SENTENCIA	55

Procede el Despacho a proferir sentencia de primera instancia dentro de la acción constitucional de la referencia, cuyo objeto de estudio corresponde a la petición de salvaguarda del derecho fundamental de **PETICIÓN**.

1. ANTECEDENTES

El señor **JOHN JAIRO MUÑOZ ZULUAGA** mediante apoderado judicial procura la tutela del mencionado precepto constitucional y como consecuencia de ello que se ordene a las entidades accionadas le contesten los derechos de petición que les remitió el 19 de junio de 2020 y 26 de febrero de 2021.

Como fundamento de pretensiones el accionante expuso que en la primera data mencionada solicitó a la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, cumpliera la sentencia N° 295 proferida el 26 de septiembre de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales, mediante la cual se ordenó que su pensión

vitalicia de jubilación reconocida a través de Resolución N° 5313-6 del 14 de julio de 2017 fuera reajustada con “...**bonificación mensual** por valor de \$64.640,00, **asignación mensual** por valor de \$3.232.003,00 y **sobresueldo** por la suma de \$1.153.825,00”.

Dada la falta de respuesta en reiteradas oportunidades le pidió a la FIDUPREVISORA que atendiera su requerimiento, pero siempre le indicaron “...que estaba pendiente que nombraran un funcionario para estudio”.

Que en vista de que han transcurrido más de dieciséis meses desde que se profirió la sentencia judicial cuyo cumplimiento imploró el 26 de febrero de 2021 y quedar efectivamente radicada su solicitud con el N° 20211010547132, a la fecha tampoco ha sido contestada.

Luego de ser admitida las presentes diligencias, las entidades que concurren se pronunciaron de la siguiente forma:

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL precisó que es ajeno a los supuestos fácticos planteados por la accionantes en el caso de marras, toda vez que considera que lo relatado en el escrito de tutela le compete a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS y a la FIDUPREVISORA S.A. dado que las peticiones que dan origen al presente trámite constitucional fueron radicados en esas entidades.

La FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO indicó que la solicitud elevada el 26 de febrero de 2021 por el señor John Jairo Muñoz Zuluaga quedó radicada con el N° 20211010547132 y fue remitida al área encargada de atenderla, pero que en razón a la situación de salubridad decretada a nivel nacional, la operación se ha visto afectada de manera negativa y ello ha generado congestión de solicitudes, pero están siendo atendidas en orden cronológico y para ello implementaron acciones de contingencia que les permita evacuar de manera efectiva los represamientos de más de 5000 solicitudes.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Debate jurídico

De acuerdo a la situación fáctica planteada, corresponde al Despacho determinar si con ocasión a la conducta observada por las entidades accionadas dentro del presente trámite, se vulneró el derecho fundamental invocado por el señor John Jairo Muñoz Zuluaga.

2.2. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela consagrada en el art. 86 de la Constitución Nacional, es un mecanismo subsidiario y residual instituido para la defensa de los Derechos Fundamentales de las personas cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por las autoridades públicas y excepcionalmente por los particulares autorizados por la ley, procedencia que además se encuentra reglamentada conforme a lo establecido en los artículos 5 y 42 del decreto 2591 de 1991.

2.3. Análisis del caso concreto:

Luego de verificados los hechos que motivaron la presente acción constitucional, además de las pruebas allegadas con el libelo introductor, se evidencia por parte de este despacho judicial que existe transgresión del derecho fundamental petición del accionante por parte de la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS** y la **FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**, situación que se pasará a dilucidar.

Lo anterior, dado que las peticiones que dieron origen al presente trámite constitucional ciertamente fueron radicadas por el señor John Jairo Muñoz Zuluaga el 19 de junio de 2020 y el 26 de febrero de 2021: la primera al correo electrónico atencionalciudadano@sedcaldas.gov.co según los registros y constancias aportadas por el accionante; y la segunda, en la plataforma de la entidad destinataria la cual quedó radicada con el N° 20211010547132; pues así lo sostuvo el actor constitucional y lo reiteró la FIDUPREVISORA en la respuesta dada al presente trámite.

Ahora bien, a la fecha no aparece comprobado que las citadas entidades hayan atendido de fondo, adecuadamente y con notificación efectiva, las aludidas súplicas, situación que se corrobora con las intervenciones de los extremos procesales, pues éstos son coincidentes en señalar que no se ha emitido respuesta alguna a la actora y además la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas no esgrimió argumento alguno encaminado a demostrar que atendió la súplica del actor constitucional.

En relación al tema objeto de discusión, la H. Corte Constitucional en abundante jurisprudencia ha señalado los parámetros que debe valorar el juez de tutela para determinar si se transgredió o no el citado derecho fundamental, dentro de los cuales se destaca que la contestación debe ser oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el artículo 14 del Decreto 1755 de 2015 y/o normas especiales, porque el derecho en comento se haría vano si no existiera el correlativo deber de las autoridades públicas y de los particulares de responder lo suplicado en tiempo razonable; a lo que se añade que dicha respuesta debe ser de fondo y notificada a los peticionarios.

Por lo tanto, se reitera que en el caso de marras existe vulneración del mencionado precepto fundamental del señor John Jairo Muñoz Zuluaga, en vista de que la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS** y la **FIDUPREVISORA S.A.**, han contado con lapsos suficientes para replicar las solicitudes por él elevadas, pues desde que tales peticiones fueron radicadas a la actual fecha han transcurrido más de 11 y 2 meses, respectivamente, excediendo de manera notable los términos consagrados en la citada norma para ser atendidas.

Inclusive los lapsos establecidos en el artículo 5 del Decreto 491 de 2020 para la contestación de peticiones, durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional en razón a la existencia de la pandemia COVID-19, también se encuentran superados.

Al no haberse verificado el acatamiento de los parámetros básicos para tener por satisfecha la petición del accionante, se amparará el derecho fundamental de petición del señor **JOHN JAIRO MUÑOZ ZULUAGA**, por consiguiente se ordenará a la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS** y a la **FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO** que le contesten respectivamente las peticiones que el mencionado radicó el **19 de junio de 2020** y el **26 de febrero de 2021**, por medio de las cuales solicitó el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia N° 295 proferida el 26 de septiembre de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales, que ordenó el reajuste de la pensión vitalicia de jubilación reconocida a través de Resolución N° 5313-6 del 14 de julio de 2017; además de ello deberán notificarle efectivamente las respectivas repuestas.

Dado que el **Ministerio de Educación Nacional**, no es responsable de la transgresión o amenaza de precepto fundamental alguno del señor JOHN JAIRO MUÑOZ ZULUAGA, será exonerado de responsabilidad dentro del presente trámite.

Por lo expuesto, el **JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE MANIZALES**, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la Ley,

FALLA

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor **JOHN JAIRO MUÑOZ ZULUAGA** identificado con la C.C. **10.256.584 de Manizales, Caldas**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS** y a la **FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO** que dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de esta providencia, den respuesta de fondo, clara, precisa y con

notificación efectiva a las peticiones radicadas por el señor **JOHN JAIRO MUÑOZ ZULUAGA** el **19 de junio de 2020** y el **26 de febrero de 2021**, a través de las cuales les solicitó dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia N° 295 proferida el 26 de septiembre de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales, a través de la cual ordenó el reajuste de la pensión vitalicia de jubilación que le fue reconocida mediante la Resolución N° 5313-6 del 14 de julio de 2017; además de ello deberán notificarle efectivamente las respectivas contestaciones.

TERCERO: EXONERAR de responsabilidad, al **Ministerio de Educación Nacional**.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz, con la advertencia que podrá ser impugnado este fallo dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

QUINTO: PREVENIR a las autoridades accionadas sobre las sanciones a que se pueden hacer acreedores por el incumplimiento a este fallo de tutela (Art. 52 Decreto 2591 de 1991).

SEXTO: ENVIAR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

**GUILLERMO ZULUAGA GIRALDO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 006 CIVIL DEL CIRCUITO MANIZALES**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**cddbe8aa55494adf47e3b29066d24804ffbf0e2270dac00d715576ab1
9e04b5b**

Documento generado en 18/05/2021 12:26:49 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**